

Thomas Angotti

Catedrático emérito de Políticas y Planificación Urbanas en el Hunter College y en el Graduate Center, City University of New York (CUNY)

Los gobiernos locales de las muy urbanizadas regiones de América del Norte y Europa se enfrentan a protestas contra fenómenos como la gentrificación y el desplazamiento; protestas que, muchas veces, abren nuevas vías a la participación de las poblaciones afectadas en los procesos decisorios en el ámbito local (a través de la planificación comunitaria, los presupuestos participativos y otras estrategias de inclusión). En este sentido, la diversidad (por etnia, raza, género, edad y orientación sexual) suele considerarse un aspecto importante que debe protegerse y promoverse en la política municipal en respuesta a las amenazas de desplazamiento de las poblaciones vulnerables. Promover la diversidad puede contribuir a avanzar en la consecución del derecho a la ciudad. En los párrafos siguientes, plantearé si las estrategias de inclusión llevan a acabar con la diversidad, o a reforzarla, para lo que analizaré el caso de la ciudad Nueva York.

Las iniciativas de democracia participativa disimulan una serie de arraigados prejuicios que interpretan la diversidad desde la óptica de una ideología colonial y racista.

En los Estados Unidos, Nueva York ha gozado siempre de una reputación de ciudad diversa étnica y racialmente, y tolerante hacia las diferencias. Sin embargo, la persistencia de desigualdades socioeconómicas y de una desmesurada vulnerabilidad de las minorías frente a los desplazamientos en esta ciudad, en la que mayoría de sus habitantes son inmigrantes y descendientes de inmigrantes, nos recuerdan que su prolongada historia de colonialismo y racismo sigue siendo un obstáculo para la construcción de ciudades democráticas y socialmente justas. Mi argumento es que bajo esa etiqueta de ciudad diversa se halla una de las ciudades del mundo con mayor segregación racial. Las iniciativas de democracia participativa disimulan una serie de arraigados prejuicios que interpretan la diversidad desde la óptica de una ideología colonial y racista, y que reproducen las divisiones económicas y sociales heredadas del pasado. El indiscutible poder de la propiedad privada (piedra angular del colonialismo de asentamientos, la expansión territorial y el «sueño americano» de una vivienda propia) desempeña un papel primordial a la hora de provocar gentrificación, desplazamiento y desigualdades en las ciudades y las regiones metropolitanas en todo el país.

Me referiré, en primer lugar, al contexto de Estados Unidos y, a continuación, analizaré los casos de la ciudad de Nueva York y de uno de sus barrios, Inwood.

I. La tierra y la Norteamérica colonial

El desplazamiento forma parte de la historia de la colonización.

En la actualidad, los mayores propietarios de terrenos urbanos son sociedades mercantiles y de inversión inmobiliaria que controlan y son propiedad de varones de raza blanca, principalmente.

Uno de los grandes mitos nacionales de los Estados Unidos es que los inmigrantes que vinieron desde Europa para liberarse de regímenes opresores y huir de la situación económica derrotaron a las potencias coloniales del continente americano (Gran Bretaña, Francia y España) y se asentaron en un continente en su mayoría despoblado. De hecho, se afirmaba también que lo que había «descubierto» Colón era un páramo y que los colonos que se desplazaban hacia el oeste ocuparon unas tierras yermas. Pero lo cierto es que el continente americano lo ocupaban ya las naciones indígenas. Los colonos reclamaron en propiedad las tierras que administraban los pueblos indígenas; se envió a las milicias y al ejército para proteger a los colonos blancos y murieron unos 38 millones de indígenas a causa de la violencia y de las enfermedades que contrajeron al ser expulsados de esas tierras. A mediados del siglo XIX se extendió la doctrina del *destino manifiesto*, según la cual los Estados Unidos estaban destinados a expandirse por todo el continente. Así pues, el desplazamiento forma parte de la historia de la colonización (Dunbar-Ortiz, 2014) y, tanto el uno como la otra, se han mantenido como elementos esenciales del desarrollo urbano moderno, como se verá más adelante en este texto.

La mayor parte de lo que es hoy Estados Unidos (los 50 estados que forman la Unión) eran tierras que estuvieron antes bajo administración de las naciones indígenas, territorios coloniales que ocupaban potencias europeas y una considerable parte de México. Los fundadores de la nación incluyeron en 1776 únicamente los 13 estados que eran colonias del Imperio británico. Los nuevos estados se añadieron tras más de un siglo de expansión hacia el oeste, con el respaldo de tropas del ejército y la inyección de capital para la construcción del ferrocarril y de otras infraestructuras. El elemento clave para comprender de qué modo afecta esto a la diversidad y al desplazamiento en las ciudades estadounidenses es el planteamiento radicalmente distinto respecto a la tierra por parte de los colonos, por un lado, y de los pueblos indígenas, por otro. Estos últimos consideraban la tierra algo sagrado e indisolublemente unido a la vida, mientras que los colonos la consideraban una mercancía y establecieron la propiedad individual de la tierra, dejando grandes extensiones bajo la administración fiduciaria del Gobierno para parques nacionales, el ferrocarril o concesiones para explotaciones mineras y excluyendo de estas tierras a los pueblos indígenas (ibídem).

El derecho a la propiedad de la tierra se consagra en la Constitución de los Estados Unidos y se considera el fundamento de todos los demás derechos individuales. En la práctica, es un elemento esencial de los privilegios de los blancos. Los propietarios eran en su mayoría varones de raza blanca y la propiedad de la tierra era el punto de acceso al Gobierno, de modo que la tierra era la base del poder político. Incluso en la actualidad, los mayores propietarios de terrenos urbanos son sociedades mercantiles y de inversión inmobiliaria que controlan y son propiedad de varones de raza blanca, principalmente. El desarrollo de las ciudades en los Estados Unidos obedece al mercado privado del suelo, en donde el papel del Gobierno ha consistido en regular el crecimiento a través de la recalificación urbanística, de los

impuestos y de los códigos de salud pública. Las iniciativas dirigidas a fomentar la planificación urbana integral orientada al interés público han sido escasas y, en el mejor de los casos, han dado como resultado grandes proyectos de infraestructuras como, por ejemplo, la red federal de autopistas interestatales, que fomentó el desarrollo urbano privado.

Tal como ha demostrado el historiador Kenneth Jackson, a la expansión hacia el oeste del siglo XIX y la creación de haciendas privadas en las tierras que antes administraban los indígenas le siguió un proceso similar de desarrollo suburbano en los Estados Unidos. Ambos se basaban en el «sueño americano» de la propiedad individual de una vivienda, un privilegio que les estaba vedado a los negros a causa de la esclavitud y, después, de la discriminación por parte del mercado inmobiliario, de la economía, y del sector de las aseguradoras (Jackson, 1985). Y ese sueño se complementó, además, con el crecimiento económico sustentado en la propiedad individual de un vehículo, un ordenador personal, teléfonos, dispositivos electrónicos y la entrega al consumo masivo.

El colonialismo en los Estados Unidos no es un mero vestigio del pasado, sino que perdura en el presente. Los Estados Unidos tienen presencia militar en cada parte del planeta y gastan en armamento más que el conjunto del resto de naciones del mundo. Sin embargo, su dominio sobre otras naciones no es mediante la dominación colonial directa, sino de regímenes interpuestos nominalmente democráticos, del control económico y de intervenciones militares. En la era del capitalismo globalizado, los Estados Unidos ejercen el poder imperial en grado tal que nunca antes vio ninguna otra nación¹.

En el sistema federal estadounidense, la financiación y el control de la enseñanza y de los servicios urbanos, así como el derecho a la administración local, provienen de la propiedad de los terrenos. En la actualidad, la educación pública en los Estados Unidos se financia principalmente a través de la recaudación de los impuestos locales (contribución urbana), con lo que los ricos disponen de mejores sistemas educativos y servicios. Esto explica la razón de que nuestro sistema educativo esté tan segregado en función de los ingresos y de la raza: el bajo valor de los inmuebles en las comunidades negras y pobres no permite nutrir sus sistemas educativos, en tanto que los propietarios de raza blanca sí pueden permitirse centros educativos con la financiación adecuada.

El argumento fundamental aquí es que el control sobre la tierra ha constituido un elemento fundamental en la distribución del poder político en los Estados Unidos, y que esto se halla arraigado en su pasado colonial y en el presente imperialista. Esto no es ya solo el aspecto fundamental de la expansión, es también la clave para mantener el poder de las élites propietarias en cada uno de los asentamientos humanos: pueblos, ciudades pequeñas, grandes ciudades, barrios y regiones metropolitanas. La recalificación urbanística y la planificación de usos urbanísticos, sobre las que deciden poderosos intereses y élites inmobiliarias, resultan fundamentales para mantener la segregación y los privilegios de los blancos, y son obstáculos a la diversidad en lugar de medios para obtenerla.

El control sobre la tierra ha constituido un elemento fundamental en la distribución del poder político en los Estados Unidos.

El racismo no desapareció con la migración de los negros a los estados del norte (los primeros estados libres).

1. Sin embargo, los Estados Unidos aún gobiernan Puerto Rico y diversas Islas del Pacífico como colonias.

El desplazamiento es parte orgánica de la historia y el desarrollo urbano de la nación.

Las divisiones raciales y territoriales refuerzan y coinciden con los grandes desequilibrios en el poder político y económico.

II. Raza y desplazamiento

Otro de los grandes mitos nacionales dice que el fundamento político de los Estados Unidos es la libertad individual para todos. La realidad es que la nación surgió como un Estado esclavista: millones de esclavos fueron desplazados desde África. Y no ya solo se los excluyó de la posibilidad de ser propietarios, sino que ellos mismos *eran* propiedades, mientras que los colonos blancos acumulaban terrenos en propiedad. Por tanto, raza, desplazamiento y colonialismo han estado unidos desde el principio.

La esclavitud no fue abolida hasta después de la Guerra Civil, en 1865. Apenas una década después de que los negros comenzasen a reconstruir un futuro diferente, surgió de nuevo un racismo institucionalizado cuya consecuencia fue el llamado *siglo de Jim Crow*, un sistema de normas por el que la segregación residencial y la discriminación en los espacios públicos eran legales en los estados del sur. En todo el sur, en restaurantes, hoteles, fuentes públicas, aseos y en la mayor parte de lugares públicos había carteles discriminatorios en los que se leía «solo blancos» (*Whites Only*), y «personas de color» (*Colored*). Cuando el Movimiento por los Derechos Civiles de la década de los sesenta logró acabar con el *sistema Jim Crow*, siguió una feroz reacción de los blancos más inmovilistas en forma de «guerra a la delincuencia», cuya consecuencia fue la tasa de encarcelamiento más alta de todo el mundo, donde la población reclusa era en su mayoría negra y morena –afroamericanos y latinos– (Alexander, 2012).

El racismo no desapareció con la migración de los negros a los estados del norte (los primeros estados libres). Aún hoy, las áreas metropolitanas de los Estados Unidos siguen estando muy segregadas por raza y etnia, y las iniciativas en el ámbito local para crear comunidades basadas en la democracia y la igualdad se enfrentan a una resistencia a la integración con profundas raíces históricas (Massey y Denton, 1993). Durante el crecimiento suburbano posterior a la Segunda Guerra Mundial, la política pública denominada *redlining* [establecimiento de líneas rojas] hizo imposible en la práctica para los negros adquirir viviendas nuevas en las zonas periféricas o acceder al crédito para acondicionar sus hogares en el centro de las ciudades². Actualmente, los préstamos abusivos de los bancos y las instituciones financieras explotan de forma desproporcionada a los negros y a otras minorías, y el acceso a la financiación hipotecaria sigue siendo discriminatorio. Por tanto, las iniciativas en los ámbitos local y nacional para crear y defender ciudades diversas se enfrentan con profundas raíces históricas que siguen generando nuevas formas de segregación. No se trata de meros *restos* de un pasado lejano, sino de una realidad que existe y se reproduce en el presente.

III. Nueva York: bajo la sombra de la Ciudad del Lujo

A continuación sigue un breve análisis sobre el caso de la ciudad de Nueva York, en el que se subraya el principal argumento que trato de exponer en este artículo: los obstáculos a las soluciones democráticas respecto a las divisiones por raza y clase en la moderna metrópolis son muy profundos y, en los Estados Unidos, son intrínsecos a cuatro siglos de colonialismo de asentamientos y racismo, y se reflejan en un proceso sistémico de *desplazamiento* de personas y de comunidades enteras en

2. *Redlining* es un término que describe la práctica por la que se prohíben las hipotecas con garantía federal en todos aquellos distritos cuyo censo tiene más de un 5% de la población es negra. Se trata de una práctica abiertamente discriminatoria, que se fundamenta en el presupuesto de que invertir en comunidades negras supone un riesgo universal.

función de la raza y la etnia. En suma, el desplazamiento es parte orgánica de la historia y el desarrollo urbano de la nación (Fullilove, 2004).

Desde la distancia, la impresión que da Nueva York es la de una ciudad ejemplo de cosmopolitismo, diversidad étnica e integración racial, un modelo atípico de justicia social e integración étnica. Presume de ser un crisol de culturas, el llamado *melting pot*, y la mayoría de su población la componen inmigrantes y descendientes de inmigrantes. El turista que viaje en el metro de Nueva York se encontrará con muy diversos tipos de razas, colores, etnias y personas disconformes sexualmente. Pero si lo que se tiene en cuenta es dónde y cómo viven esas personas, resulta que es una de las ciudades con mayor segregación racial de los Estados Unidos y que su paisaje se fragmenta en una miríada de enclaves étnicos. Estas divisiones raciales y territoriales refuerzan y coinciden con los grandes desequilibrios en el poder político y económico y con la capacidad de controlar el desarrollo y el cambio (Angotti, 2008; Angotti y Morse, 2017).

Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno federal creó un programa de renovación urbanística que permitió al municipio penalizar los terrenos de los barrios de rentas bajas (que, en su mayor parte, son vecindarios negros y latinos) para promover la creación de urbanizaciones de lujo. Estos distritos se resistieron, coincidiendo con el potente movimiento por los derechos civiles de los años sesenta, poniendo de manifiesto injusticias raciales. Al mismo tiempo, los barrios negros exigieron el control por la comunidad de los centros de enseñanza, cuyo personal lo formaban en su mayor parte maestros de raza blanca que no vivían en el propio vecindario. Tras el asesinato en 1968 de Martin Luther King Jr., los disturbios civiles generalizados (en Nueva York y en otras grandes ciudades) hicieron aún más patentes las demandas de cambio (Informe del Comité Asesor Nacional en materia de Disturbios Civiles, 1968).

La hegemonía del mercado inmobiliario se mantiene controlando las complejas y enrevesadas normativas de recalificaciones urbanísticas y ordenación territorial.

IV. Tierra, raza y planificación comunitaria

A lo largo de la historia, las desigualdades estructurales en el largo plazo relacionadas con el desarrollo urbanístico, la raza y la etnia han encontrado protestas y resistencia. El movimiento por los derechos civiles ha crecido y ha madurado; gracias a ello, los distritos negros y latinos que se enfrentan al desplazamiento masivo se resistieron y lograron ralentizar o detener los procesos, obtener importantes concesiones y abrir nuevas oportunidades a la regulación y el control del desarrollo urbanístico. A pesar de que Nueva York presume ahora de ser la «capital inmobiliaria mundial», no ha conseguido doblegar a las organizaciones de base, como demuestra la reciente cancelación del plan de Amazon, la mayor empresa del mundo, de construir una nueva sede en esta ciudad como consecuencia de las movilizaciones sociales.

En sus 400 años de historia, Nueva York se ha distinguido entre todas las principales ciudades de los Estados Unidos por no haber desarrollado ni aprobado nunca un plan integral de amplio alcance. La propiedad privada del terreno ha prevalecido desde los tiempos en que los colonos europeos se apoderaron de las tierras habitadas por el pueblo nativo de los lenni-lenape. Hoy, la hegemonía del mercado inmobiliario se mantiene controlando las complejas y enrevesadas normativas de recalificaciones urbanísticas y ordenación territorial.

Tras las históricas protestas por los derechos civiles y la lucha contra el programa de renovación urbana, se instituyeron reformas políticas para enmendar los desequilibrios históricos en el poder decisorio municipal.

Los planes comunitarios se concibieron como un medio para garantizar mejoras en la comunidad sin necesidad de desplazamiento.

Por otra parte, la planificación comunitaria surgió como un instrumento de participación que permitiese a las comunidades de rentas bajas tener voz en la toma de decisiones municipal. En 1959, los residentes y los comercios del Lower East Side de Manhattan, un barrio de clase trabajadora multiétnica, se enfrentaban a un plan de renovación urbana que habría desplazado a miles de personas para poder construir vivienda a precio de mercado de clase media. Reaccionaron y, tras más de una década de lucha, consiguieron echar abajo el plan y recabar apoyos para el suyo propio. El plan alternativo *Cooper Square Alternate Plan* fue el primero de una larga lista de planes comunitarios creados como alternativa a los planes oficiales que están impulsados por la especulación del mercado del suelo y que no tienen en cuenta el efecto negativo para las comunidades de color (Angotti, 2008 y 2014).

Las sucesivas protestas (de los inquilinos y la comunidad) contra el desplazamiento tuvieron como efecto importantes reformas en materia de planificación y ordenamiento. Tras las históricas protestas por los derechos civiles y la lucha contra el programa de renovación urbana, se instituyeron reformas políticas para enmendar los desequilibrios históricos en el poder decisorio municipal. En 1975, el municipio creó 50 juntas comunitarias y estableció un proceso estructurado para la toma de decisiones en el caso de las recalificaciones urbanísticas más importantes. Hasta entonces, el control lo ejercían la alcaldía y su comité de planificación³. Sin embargo, el poderoso sector inmobiliario configuró el nuevo proceso de tal modo que las comunidades apenas disponían de voz y su voto era simbólico, lo que dejó el poder en manos de los agentes y dirigentes políticos tradicionales –varones de raza blanca y aliados de los propietarios más poderosos–, quienes disponían de los recursos económicos y políticos necesarios para influir en las decisiones en materia de usos urbanísticos de los terrenos. En la actualidad, la influyente Junta Inmobiliaria de Nueva York (REBNY por sus siglas en inglés)⁴ está dominada por empresas y personas poderosas, que siguen siendo principalmente varones de raza blanca. La REBNY es el mayor contribuyente financiero de los políticos locales y se ha opuesto con éxito a que las juntas comunitarias, que cuentan con presupuestos restringidos y carecen de suficiente personal, tengan más poder.

En 1989, las reformas propugnadas por las organizaciones de defensa de los derechos civiles reestructuraron el gobierno, otorgándose además a las juntas comunitarias la autoridad expresa para desarrollar sus propios planes. Este impulso de la planificación comunitaria contó con el respaldo firme del movimiento por la justicia medioambiental, que había estado luchando contra las infraestructuras nocivas que causaban perjuicios a la salud y al entorno en las comunidades de color. Los planes comunitarios se concibieron como un medio para garantizar mejoras en la comunidad sin necesidad de desplazamiento tras incrementarse el valor de los terrenos una vez eliminados los peligros medioambientales (Sze, 2006). Sin embargo, lo que siguió fue una enorme presión ejercida desde arriba a favor de las nuevas urbanizaciones de edificaciones de lujo de varias plantas facilitadas por una recalificación urbanística estratégica. Los planes comunitarios se ignoraron casi por completo y, una vez más, se dio prioridad al incremento del valor del suelo y no la equidad racial. Pese a que se han llevado a cabo diversos planes comunitarios, el municipio sigue decidiendo en función de recalificaciones urbanísticas que tienden a favorecer las necesidades de los promotores –en lugar de tener en cuenta los intereses comunitarios– y que desplazan a personas de color de forma desproporcionada (Angotti y Morse, 2017).

3. El Proceso de Revisión del Uso Uniforme del Suelo [Uniform Land Use Review Process (ULURP)] emitió los votos decisivos al Comité Municipal de Planificación Urbana [City Planning Commission], cuya mayoría designa el alcalde, el Ayuntamiento [City Council] compuesto por 51 miembros, y el Presidente de Distrito [Borough President] (hay cinco distritos municipales en la ciudad).

4. Real Estate Board of New York.

V. Inwood: gentrificación y desplazamiento

Durante un período de dos años, el consistorio de Nueva York implicó al barrio de Inwood (en el distrito de Manhattan) en un prolongado proceso de debates públicos en relación con la propuesta municipal de recalificar una amplia parte del barrio para promover un nuevo desarrollo urbanístico residencial y comercial. Inwood es un barrio mixto por nivel económico y raza en el que el grupo más numeroso lo forman inmigrantes y descendientes de inmigrantes de la República Dominicana. La principal objeción a la propuesta municipal consistía en que esta fomentaría la gentrificación del barrio y el desplazamiento de sus vecinos y pequeños negocios más vulnerables. En particular –entre los dominicanos– el desplazamiento se percibía como discriminación racial en la medida en que las prácticas discriminatorias del sector inmobiliario limitarían las opciones de los arrendatarios dominicanos y les obligaría a trasladarse⁵. Además, las recalificaciones incrementaban, en general, el valor del suelo en zonas de viviendas de rentas bajas, con lo que los arrendadores subían los alquileres y transformaban los inmuebles en multipropiedades, cooperativas u otras formas de propiedad inmobiliaria, o se las vendían a grandes promotores, con lo que se expulsaba a los inquilinos con pocos recursos.

El proceso de recalificación en Nueva York se puso en marcha al mismo tiempo que un conjunto sin precedentes de métodos participativos, iniciativas de planificación y presupuestos comunitarios, además de una serie de iniciativas para implicar a diversos sectores de la población. Los representantes municipales sostenían que su objetivo era preservar la diversidad de la comunidad y se argumentó incluso que el nuevo desarrollo haría la comunidad más diversa al atraer a más vecinos de raza blanca. Las normas inclusivas para la recalificación urbanística exigirían que hasta un 30% de las nuevas unidades de vivienda fuesen «asequibles»; aunque, en realidad, la mayor parte de ellas no resultaba asequible para la gran mayoría de los residentes de Inwood. Los activistas de la zona contrarios a las recalificaciones creían que esto acarrearía la expulsión de los negros y los dominicanos con menos recursos económicos y, finalmente, la transformación en un barrio de clase más alta y, principalmente, de blancos. La mayoría de los vecinos serían propietarios, en una comunidad que entonces se componía sobre todo de arrendatarios. Los partidarios de la recalificación afirmaban, en cambio, que con esto se avanzaría hacia una mayor diversidad, aunque los activistas del barrio contrarios a la recalificación la percibían como un factor más de los causantes del desplazamiento, debido a que, históricamente, las personas de color con menor poder adquisitivo no tienen acceso en igualdad de condiciones a préstamos hipotecarios asequibles. Estos activistas interpusieron dos demandas ante los tribunales, una de ellas por discriminación racial, y han denunciado enérgicamente que el propósito de los procesos participativos municipales es, en realidad, apaciguar la oposición de la comunidad, en lugar de hacerla partícipe del poder decisorio municipal.

La recalificación en el barrio de Inwood seguía a una serie de recalificaciones similares en otras comunidades de color de pocos recursos, todas ellas durante el mandato del alcalde Bill DeBlasio, que había concurrido a las elecciones en una plataforma cuya base era la

Las recalificaciones incrementaban, en general, el valor del suelo en zonas de viviendas de rentas bajas.

Se argumentaba incluso que el nuevo desarrollo haría la comunidad más diversa al atraer a más vecinos de raza blanca.

5. Muchos dominicanos son de piel oscura, pero no siempre se identifican como de raza negra. Aun así, la discriminación racial en los Estados Unidos se ha basado históricamente en el falso binario negro-blanco. Este enfoque binario es particularmente problemático para la comunidad dominicana como consecuencia de los prejuicios que existen en su país de origen contra los negros, motivados por la hostilidad hacia Haití, su país vecino, el primer país del continente americano en el que tuvo lugar una revolución liderada por antiguos esclavos.

Los activistas han denunciado energicamente que el propósito de los procesos participativos municipales es, en realidad, apaciguar la oposición de la comunidad, en lugar de hacerla partícipe del poder decisorio municipal.

La cuestión de la propiedad privada de los terrenos – que establecieron en primer lugar los colonos holandeses y británicos sobre tierras que antes administraba el pueblo lenape – sigue hoy sin resolverse.

reducción de las desigualdades. Todas las recalificaciones de terrenos acometidas por su equipo fueron recibidas con un acalorado rechazo y se enfrentaron a una firme oposición. Antes del período de DeBlasio, la Administración municipal del multimillonario Michael Bloomberg acometió durante su mandato la recalificación de casi el 40% del suelo de la ciudad para fomentar nuevos desarrollos. La mayoría de estas recalificaciones siguieron una pauta similar: preservar las zonas más ricas de población blanca, mientras que era en las comunidades de color (negros, latinos y asiáticos) de menor poder adquisitivo donde se proyectaban los nuevos desarrollos, estimulando así los procesos de gentrificación gradual ya emprendidos y de desplazamiento de los residentes y pequeños comercios (Angotti, 2008; Angotti y Morse, 2017). Durante los debates públicos en torno a las recalificaciones, muchos activistas comunitarios recordaron denuncias reiteradas consistentes en que la gentrificación y el desplazamiento no eran únicamente fruto de fenómenos económicos, sino que derivaban de la larga y profunda historia del colonialismo de asentamientos y el racismo, aún existentes en la ciudad, la nación y el continente entero –incluida la República Dominicana–. Estados Unidos lleva aplicando en América Latina desde el siglo XIX la denominada Doctrina Monroe, por la que se reservan el derecho a intervenir de forma abierta o encubierta cuando consideren que así lo exigen razones de interés nacional. Y así lo han hecho en numerosas ocasiones (Galeano, 1973). En 1965 invadieron la República Dominicana y derrocaron a un presidente elegido democráticamente, lo que, unido a la dependencia económica, contribuyó al flujo de inmigrantes dominicanos a Nueva York.

Pese a los últimos cambios progresistas en la Administración municipal, la cuestión de la propiedad privada de los terrenos –que establecieron en primer lugar los colonos holandeses y británicos sobre tierras que antes administraba el pueblo lenape– sigue hoy sin resolverse: los propietarios son ahora sociedades mercantiles, incluidas las de inversión inmobiliaria y fondos de inversiones, sociedades de responsabilidad limitada e inversores de todas partes del mundo. Esta situación no difiere en esencia de la del período colonial, cuando los propietarios de los terrenos eran blancos de origen europeo. Ahora se han globalizado de forma genuina, aunque siguen vinculados orgánicamente al capital financiero, a Wall Street y a empresas internacionales de inversión. Pese a que casi todos hayan olvidado las raíces coloniales, lo que no ha cambiado es el vínculo orgánico entre la vida en la ciudad y el control de los terrenos por fuerzas externas, ni la conexión entre las inversiones inmobiliarias y el desplazamiento de personas de color con menos recursos.

En la actualidad, la mayoría de las familias de la ciudad son arrendatarios sometidos a enormes presiones para mudarse cuando aumenta el valor de los terrenos y los propietarios quieren vender o reacondicionar sus inmuebles. El desplazamiento amenaza también a los pequeños propietarios, en particular a negros y latinos que lograron comprar su propia vivienda pese a la discriminación de los bancos y las compañías de seguros que se negaron a concederles créditos. En conclusión, la herencia colonial que otorgó entonces el poder a los terratenientes, en su mayoría de origen europeo, sigue hoy viva, aunque en una forma más globalizada.

VI. La raza importa

En resumen, y en palabras de Cornell West, «la raza importa» (West, 1993). El desplazamiento residencial acarrea consecuencias distintas para los negros y los blancos. Forma parte de la historia de los negros: fueron primero desplazados desde África; entonces, cuando se abolió la esclavitud, escaparon de la exclusión racista del sur y se trasladaron a ciudades del norte del país, donde vivían en barrios segregados. Más tarde, fueron desplazados del centro de las ciudades a causa de los programas de renovación urbana –que el movimiento por los Derechos Civiles denomina *Negro Removal* [expulsión de los negros]– (Fullilove, 2004). Hoy, intensas presiones inmobiliarias siguen expulsando a los negros y a otras minorías raciales de modo que grandes áreas de las zonas periféricas alrededor de Nueva York –que una vez fueron completamente *blancas*– son ahora barrios negros, latinos y asiáticos. La gentrificación y el desplazamiento, desmintiendo muchos de los mitos liberales, no han propiciado la integración racial, sino que han incrementado la segregación en la ciudad y sus barrios periféricos (Regional Plan Association, 2017).

Esta realidad echa por tierra el mito del *crisol de culturas*. Y, además, refuta las afirmaciones del sector inmobiliario en el sentido de que solo mediante el desarrollo de vivienda nueva se podrá proporcionar a las minorías las viviendas que necesitan, y así, automáticamente, acabar con la segregación en la ciudad. Las más recientes oleadas de construcción de edificios altos coinciden con el aumento de la desigualdad y segregación. La estrategia urbanística que impera en la actualidad se fundamenta en la llamada «economía de goteo»; es decir, que simplemente aumentando la oferta de vivienda bajarán los precios y habrá más unidades de vivienda a disposición de las personas con bajos ingresos, que son desproporcionadamente personas de color. La evidencia desmiente este mito: los números más altos de vacantes se dan en edificios de nueva construcción; después de los auges de construcción inmobiliaria, se producen subidas de los alquileres vigentes, en lugar de bajadas, provocando la expulsión de los arrendatarios con pocos recursos; y los drásticos aumentos del valor de los terrenos, estimulados por los nuevos desarrollos urbanísticos, suponen un gran obstáculo a una vivienda más accesible para las personas menos pudientes.

En conclusión, el problema fundamental concierne en realidad al terreno, no a la vivienda. El valor de los terrenos se incrementa con el desarrollo de urbanizaciones de lujo, lo que acarrea un efecto expansivo cuya consecuencia es la subida de los alquileres en viviendas cercanas con inquilinos de bajos ingresos, que son por tanto expulsados. Ello es fruto del legado colonial y la usurpación de las tierras que antes usaban –no *poseían*– los pueblos indígenas. Los colonos holandeses e ingleses se las apropiaron y las vendieron por su valor monetario.

Los propagadores de los mitos de la diversidad étnica de la ciudad de Nueva York, además, se centran exclusivamente en el núcleo urbano, de unos ocho millones de habitantes, como si fuese la totalidad de la metrópolis, que es en realidad una región con más de 22 millones de habitantes que abarca partes de tres estados distintos: Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. La realidad actual es que en toda la región, así como en el núcleo urbano de Nueva York, persiste la segregación por raza y por ingresos, impulsados por la inexorable tendencia al aumento

La gentrificación y el desplazamiento, desmintiendo muchos de los mitos liberales, no han propiciado la integración racial.

El problema fundamental concierne en realidad al terreno, no a la vivienda.

del valor del suelo que se extiende del centro a la periferia. A medida que los suburbios devienen cada vez más diversos étnicamente y con más vivienda de alquiler que propiedades privadas, se incrementa el grado de segregación de estas áreas de la ciudad⁶.

Referencias Bibliográficas

Alexander, M. *The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness*. Nueva York: The New Press, 2012.

Angotti, T. *New York For Sale: Community Planning Confronts Global Real Estate*. Cambridge: MIT Press, 2008.

Angotti, T. «Struggles for Land and the Promise of the Community Land Trust», 2014 (en línea) [Fecha de consulta 26.09. 19] <https://tomangotti.files.wordpress.com/2014/04/communityland.pdf>.

Angotti, T. y Morse, S. (eds.). *Zoned Out: Race, Displacement and City Planning in New York City*. Nueva York: UR Books, 2017.

Dunbar-Ortiz, R. *An Indigeous Peoples' History of the United States*. Boston: Beacon Press, 2014.

Fullilove, M. *Root Shock: How Tearing Up City Neighborhoods Hurts America and What We Can Do About It*. Nueva York: Ballantine Books, 2004.

Galeano, E. *The Open Veins of Latin America: Five Centuries of the Pillage of the Continent*. Nueva York: Monthly Review, 1973.

Jackson, K. *Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States*. Nueva York: Oxford University Press, 1985.

Massey, D. y Denton, N. *American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass*. Cambridge: Harvard University Press, 1993.

Regional Plan Association. *Pushed Out: Housing Displacement in an Unaffordable Region*. Nueva York, 2017.

Regional Plan Association. *Inclusive City: Strategies to Achieve More Equitable and Predictable Land Use in New York City*. Nueva York, 2018.

Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders. Nueva York: Bantam, 1968.

Sze, J. *Noxious New York*. Cambridge: MIT Press, 2006.

West, C. *Race Matters*. Nueva York: Beacon Press, 1993.

6. La Asociación del Plan Regional [Regional Plan Association], una poderosa asociación sin ánimo de lucro, sí reconoce que el desplazamiento de minorías raciales en la región es un problema, pese a que el municipio de Nueva York lo ha pasado por alto (Regional Plan Association, 2017 y 2018).